

**RE: CONTESTACIÓN DE DEMANDA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI - RAD. N°19001333300120220019700 ABNER CALIX CAMPO Y OTROS**

Juzgado 01 Administrativo - Cauca - Popayan <j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 08/05/2023 11:30

Para: Felipe Andres Bastidas Paredes <buzonjudicial@ani.gov.co>

Acuso Recibo.

Se agrega al Proceso

Atentamente,

**Diana C. Trujillo Cerón**

Citadora Juzgado Primero Administrativo Circuito Popayan

---

**De:** Buzon Judicial <buzonjudicial@ani.gov.co>

**Enviado:** lunes, 8 de mayo de 2023 10:54

**Para:** Juzgado 01 Administrativo - Cauca - Popayan <j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Cc:** chavesmartinez@hotmail.com <chavesmartinez@hotmail.com>; info450@interv4g.co <info450@interv4g.co>; coomotorista@gmail.com <coomotorista@gmail.com>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; Ivan Andres Lievano Pajoy <ialievano@procuraduria.gov.co>; Notificaciones Judiciales Invias <njudiciales@invias.gov.co>; notificacionesjudiciales LastName <notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co>; Ana Samara Angel Moreno <aangel@mintransporte.gov.co>; abnercalix@aulook.com <abnercalix@aulook.com>; María Victoria Uribe Dussan <mvuribe@ani.gov.co>; Orfeo Radicar <orfeoradicar@ani.gov.co>

**Asunto:** CONTESTACIÓN DE DEMANDA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI - RAD. N°19001333300120220019700 ABNER CALIX CAMPO Y OTROS

Bogotá D.C.

Doctor:

**ERNESTO ANDRADE SOLARTE**

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

Correo: [j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**Ref.: Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA**

**Radicado:** 19001-33-33-001-2022-00197-00

**Demandantes:** Abner Calix Campo y otros

**Demandados:** Agencia Nacional de Infraestructura ANI y otros.

**ASUNTO: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE - CONTESTACIÓN DEMANDA ANI - PROCESO N°2022-0197**

**MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C, identificada con la cédula de ciudadanía N°52.047.190 de Bogotá D.C., abogada titulado e inscrita, portadora de la tarjeta profesional N°86.544 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura, en adelante (ANI) conforme al poder otorgado por el Gerente de Proyecto o Funcional G2-09, Coordinador GIT Defensa Judicial de la ANI, en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, el cual se adjunta y allega con este escrito y con la respectiva y oportuna contestación de la demanda y el llamamiento en garantía de la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S..

Comendidamente solicito reconocerme personería como apoderada judicial de la ANI en el proceso de la referencia.

Indicando como dirección para recibir notificaciones al correo: [buzonjudicial@ani.gov.co](mailto:buzonjudicial@ani.gov.co) y/o al correo electrónico institucional [mvuribe@ani.gov.co](mailto:mvuribe@ani.gov.co) y [mariavictoria.mvud@gmail.com](mailto:mariavictoria.mvud@gmail.com) (correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados).

Agradezco además me permitan acceso al expediente digital, especialmente allegar el enlace para asistir virtualmente a la referida audiencia; así como acusar recibido de esta información.

Atentamente,



MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN

CC N°52.047.190 de Bogotá  
TP N°86.544 del Consejo Superior de la Judicatura



#### Buzon Judicial

Vicepresidencia Jurídica

Vicepresidencia Jurídica

PBX: 571 - 484 8860 Ext:

Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2

Bogotá D.C. – Colombia - [www.ani.gov.co](http://www.ani.gov.co)



"Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social Principales medidas de bioseguridad:

- Lávese las manos frecuentemente.
- Use el tapabocas cubriendo nariz y boca.
- Practique el distanciamiento físico.
- Lo invitamos a descargar y reportar diariamente su condición de salud en la Aplicación CoronApp-Colombia o en Alissta si está afiliado a la ARL POSITIVA.

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) destinatario(s) / En la Agencia Nacional de Infraestructura respetamos y garantizamos que los datos personales suministrados por usted, a través de nuestros canales de comunicación, estén protegidos y no se divulgarán sin su consentimiento. Cumplimos con nuestra política de Confidencialidad y Protección de Datos. Si quiere conocerla lo invitamos a consultarla [aquí](#). Si ha recibido este mensaje por error; por favor notifíquesele inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como personales y no están avaladas por la compañía.

Tabla de contenido contestación de demanda de Abner Calix Campo vs. ANI y otros. Exp. 2022-00197.

I. OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÓN

II. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES

III. RESPECTO DE LOS HECHOS

a. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANI:

b. Inexistencia de la falla del servicio

c. Hecho de un tercero:

d. Inexistencia de solidaridad de la ANI frente a las conductas de los particulares:

e. Pleito Pendiente Parcial

IV. PRUEBAS

a. Documentales:

V. ANEXOS

VI. NOTIFICACIONES

2

3

3

6

10

13

13

15

1

1

1

1



Doctor:

**ERNESTO ANDRADE SOLARTE**

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

Correo: [j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

REFERENCIA:

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** ABNER CALIX CAMPO Y OTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN; MINISTERIO DE TRANSPORTE; AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI; CONSORCIO NUEVO CAUCA S.A.S.; EMPRESA DE TRANSPORTE COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA - COOMOTORISTAS Y OTROS

**RADICACIÓN:** 19001333300120220019700

**ASUNTO:** Contestación de demanda – ANI.

EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO EL CONCESIONARIO, POR SU CUENTA Y RIESGO, LLEVE A CABO EL PROYECTO . EL ALCANCE FISICO DEL PROYECTO SE DESCRIBE EN LA PARTE ESPECIAL Y EN EL APENDICE TECNICO 1

NUEVO CAUCA SAS, Nit de Persona Jurídica No. 900866440-9 representante legal CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE

**MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C, identificada con la cédula de ciudadanía N°52.047.190 de Bogotá D.C., abogada titulado en ejercicio e inscrita y portadora de la tarjeta profesional N°86.544 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - en adelante ANI, agencia nacional estatal de naturaleza especial, perteneciente al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte según el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, representada legalmente por su presidente, William Camargo Triana, quien ha delegado la representación judicial de la entidad en Jimmy Alexander García Urdaneta . Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en su calidad de Gerente de Proyecto o Funcional Código G2 Grado 09 de la Planta del presidente de la ANI, respetuosamente comparezco ante su Despacho de acuerdo con el poder que allego con el presente escrito, con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA** en los siguientes términos:

## I. OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÓN

1. El artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CPACA establece que de la demanda se correrá traslado a la demandada por el término de 30 días. Por su parte, el artículo 199 ibídem consagra que el auto admisorio de la demanda se notificará personalmente con el envío de la demanda y sus anexos al buzón judicial, mientras que los términos empezarán a correr al día siguiente del vencimiento de los dos días siguientes al envío de la notificación en comento.



2. En el caso concreto, la demanda, sus anexos y el auto admisorio de la demanda de fecha 16 de marzo de 2023 notificado por Estado electrónico N°22 de 17 de marzo de 2023, razón por la cual los dos días a los que refiere el artículo 199 del CPACA se agotaron los días 17 y 21 de marzo de 2023 y, con ello, el término de traslado inició a correr el día 22 de marzo de 2023. Así las cosas, el término de traslado vence el día 10 de mayo de 2023.

3. Como esta contestación se radica dentro de dicho término de traslado, la misma resulta ser oportuna.

## II. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES

Manifiesto que me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones elevadas por la parte actora, ya que carecen de fundamento jurídico, fáctico y probatorio que permita concluir que en el presente caso mi representada ha causado algún perjuicio alegado. Lo anterior, porque no existe legitimación de la causa por pasiva de la ANI, porque no existió falla en el servicio imputable a dicha entidad, porque existe hecho de un tercero y porque la ANI no está obligada a responder solidariamente por las conductas de los particulares. Esto, de conformidad con los argumentos y adicional a las excepciones antes mencionadas, también la de pleito pendiente parcial que se propondrán en las líneas que siguen.

Teniendo en cuenta además que de conformidad con el artículo 3° del Decreto 4165 de 2011, la ANI tiene por objeto *“planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”*.

En cumplimiento de este objeto, el 11 de agosto de 2015, la Entidad celebró el **Contrato de Concesión N°11 de 2015** con la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. y de conformidad con la Sección 2.1. de la Parte General del Contrato *“El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”*.

## III. RESPECTO DE LOS HECHOS

**AL HECHO N°1.-** Es parcialmente cierto, si bien los señores Cornelio Campo, Gustavo Campo, Marco Fidel Campo y Rodrigo Campo efectivamente son hijos de la señora Rosalvina Ipia y del señor Noe Campo Ramos; no obra en la solicitud prueba de que María Eugenia Campo y Diocelina Campo también tengan dicha calidad.

**AL HECHO N°2.-** Es cierto, de conformidad con el Registro Civil de Matrimonio N°04587929.

**AL HECHO N°3. –** El presente hecho es un conjunto de afirmaciones del convocante, respecto de los cuales Nuevo Cauca procede a pronunciarse en los siguientes términos:



Es parcialmente cierto que de la relación del matrimonio Calix Campo se procrearon los hijos allí enlistados; lo anterior, en el entendido de que respecto del señor William Calix Campo no obra ninguna prueba que permita admitir la afirmación de que es hijo de la señora María Eugenia Campo y su esposo.

- El resto del contenido del hecho son manifestaciones subjetivas del convocante que no encuentran sustento en ninguna prueba.

**AL HECHO N°4.-** Al igual que el hecho anterior, el presente hecho se compone de un inicio que es cierto ya que la señora Natalia Campo Ipia es hija de María Eugenia Campo Ipia; sin embargo, el resto del hecho son manifestaciones subjetivas del convocante.

**AL HECHO N°5.-** No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso. Sin embargo, tal y como los hechos anteriores, la esencia de las afirmaciones son consideraciones subjetivas del convocante.

**AL HECHO N°6. –** Es cierto, de conformidad con los registros civiles anexados. Sin embargo, se debe hacer la salvedad de que, al no obrar en el expediente, el registro civil del señor William Calix Campo, no es posible establecer si su hijo -Heyler Johan Calix Muñoz- es nieto de la señora María Eugenia Campo.

**AL HECHO N°7. –** No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

**AL HECHO N°8.-** Es parcialmente cierto. De la documentación anexada únicamente se puede comprobar lo establecido en las fechas 26 y 29 de octubre de 2020; sin embargo, teniendo en cuenta que la epicrisis fue anexada de forma incompleta, no es posible verificar la veracidad de las otras afirmaciones supuestamente contenidas en dicho documento.

**AL HECHO N°9.-** Es cierto, de conformidad con el informe N°190016000703202000589 a cuyo tenor literal me atengo.

**AL HECHO N°10. –** No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

**AL HECHO N°11. –** Es cierto, de conformidad con el informe de accidente de tránsito N°001098286.

**AL HECHO N°12. –** Es parcialmente cierto, si bien es cierto que el día del accidente había un clima lluvioso, no existe prueba técnica que nos describa las condiciones del asfalto, más allá de las condiciones normales de cuando hay lluvia.

**AL HECHO N°13. –** Es parcialmente cierto. Al respecto, se debe señalar que el lugar del accidente se encuentra bien identificado; sin embargo, no es claro cómo la vía puede ser recta y curva al tiempo, como lo pretende exponer el convocante, por lo que procedemos a exponer cómo se encuentra conformado el tramo vial en dicho sector: La calzada está conformada por dos carriles bidireccionales de 3.65 metros de ancho y bermas de 1.80 metros en concreto asfáltico en buen estado y de los registros fotográficos que hacen parte de la evidencia del accidente, la vía cuenta con demarcación horizontal consistente en líneas de borde de carril de color blanco en ambos costados de la calzada y doble línea amarilla en el eje que prohíbe las maniobras de adelantamiento en el sector. Por su parte,





la calzada cuenta con bombeo que drena las aguas lluvias hacia las zonas verdes las que a su vez conducen las aguas hacia las cajas de encole de las alcantarillas, razón por la cual no se presenta empozamiento.

**AL HECHO N°14.** – No es cierto. El tramo vial cuenta con bombeo que drena las aguas hacia las zonas verdes y, estas últimas, conducen las aguas hacia las cajas de encole de las alcantarillas, razón por la cual no se presenta empozamiento.

**AL HECHO N°15.** – Es cierto, de conformidad con el informe policial N°190016000703202000589 a cuyo tenor literal me atengo.

**AL HECHO N°16.** – Es cierto, de conformidad con el informe policial N°190016000703202000589 a cuyo tenor literal me atengo.

**AL HECHO N°17.** – Es cierto, de conformidad con el informe policial N°190016000703202000589 a cuyo tenor literal me atengo.

**AL HECHO N°18.** – No es cierto. De forma específica en el sitio en el que ocurrió el accidente del bus de placas SDW-385, en la vía Panamericana RUTA 2504 Sector La Cabuyera, están instaladas las señales verticales de tránsito como sigue: Señal reglamentaria de prohibido adelantar SR-26 en el PR 04+041 margen izquierda, Señal reglamentaria de velocidad máxima permitida 50 km/h SR-30(50) ubicada en PR 04+0050 margen derecha, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0056 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0080 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0101 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0127 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0154 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0176 margen izquierda, señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75 ubicada en PR 04+0200 margen izquierda, señal reglamentaria de velocidad máxima permitida 50 km/h SR-30(50) ubicada en PR 04+0216 margen izquierda, señal preventiva curva cerrada a la izquierda SP-01 ubicada en PR 04+0315 margen izquierda, señal preventiva curva pronunciada a la izquierda SP-03 ubicada en PR 04+0361 margen derecha, señal preventiva de Proximidad a Cruce Escolar SP-47A ubicada en el PR 04+0450 margen derecha, Señal reglamentaria de velocidad máxima permitida 30 km/h SR-30(30) ubicada en PR 04+0577 margen derecha, señal reglamentaria No Adelantar SR-26 ubicada en PR 04+577 margen derecha, señal preventiva de Ubicación Cruce Escolar SP-47B ubicada en PR 04+0647 margen derecha, señal preventiva de Ubicación Cruce Escolar SP-47B ubicada en PR 04+0650 margen izquierda, señal preventiva pendiente fuerte de descenso SP-27 ubicada en PR 04+0714 margen derecha, Señal reglamentaria de velocidad máxima permitida 30 km/h SR-30(30) ubicada en PR 04+0731 margen izquierda, señal preventiva curva pronunciada a la derecha SP-04 ubicada en PR 04+0731 margen izquierda, señal preventiva zona de peatones SP-46 ubicada en PR 04+786 margen derecha, señal preventiva de Proximidad a Cruce Escolar SP-47<sup>a</sup> ubicada en el PR 04+0856 margen izquierda, señal preventiva curva pronunciada a la izquierda SP-03 ubicada en PR 04+0886 margen derecha, las cuales cumplen con lo establecido por el Manual de Señalización Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia 2015 adoptado mediante la Resolución 0001885 del 17 de Junio de 2015 del Ministerio de Transporte, en especial



cumple con las condiciones de visibilidad, estado, legibilidad y retroreflectividad que exige la normatividad actual.

**AL HECHO N°19.** – No es un hecho; son apreciaciones jurídicas del convocante y, eventualmente, será del juez determinar si se causó un daño antijurídico a la señora Campo Ipia y a su familia.

**AL HECHO N°20.** – No es un hecho; son apreciaciones jurídicas del convocante. Sin embargo, no es cierto que haya existido una falla en el servicio por parte de Nuevo Cauca, ni que existiera una omisión en las labores de conservación y mantenimiento de la zona de la vía en que ocurrió el accidente.

**AL HECHO N°21.** – No es cierto. Tal y como ya se expuso, el tramo vial cuenta con bombeo que drena las aguas hacia las zonas verdes y, estas últimas, conducen las aguas hacia las cajas de encoque de las alcantarillas, razón por la cual no se presenta empozamiento. En este sentido, no hay afectación de la estructura de la vía, ni se afectan sus propiedades geométricas, mecanismos de transferencia de carga, presiones de poros ni las presiones hidrostáticas.

**AL HECHO N°22.** – No es un hecho, es una consideración subjetiva del convocante. Sin embargo, se aclara que el accidente no puede ser endilgado a la supuesta falta de canalizadores o recolectores; por el contrario, las pruebas anexadas a la solicitud demuestran que el accidente fue causado por el actuar negligente del conductor del vehículo.

Así mismo y en consonancia con lo expuesto, la Interventoría Unión Temporal 4G se pronunció por medio de la comunicación radicada en la Agencia con el N° 20224091175742 de 19 de octubre de 2022, en la que informa:

*“(…) esta Interventoría se permite dar respuesta frente los hechos narrados por la sociedad Concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. en el comunicado NC-ANI-957 y obtener los insumos que resulten de utilidad para la Defensa Judicial para la ANI, de la siguiente manera:*

**1. Hechos del N°1 al N°17**

*Conforme a lo expresado por el Concesionario, no hay observación.*

**A LOS HECHOS N°23 a 38.** – No me constan, que se prueben.

## EXCEPCIONES DE MÉRITO

Como fundamento de las excepciones de mérito, me permito proponer las siguientes:

**a. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANI:**

1. La legitimación en la causa es uno de los presupuestos procesales para que pueda adelantarse y llevarse hasta su fin un proceso. Dicha legitimación tiene dos manifestaciones: por activa y por pasiva, siendo esta última la relevante de cara a este caso en particular. La legitimación en la causa por pasiva, según el Consejo de Estado:

*“supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. [...] la legitimación material*





*en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas [...] la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso”<sup>1</sup>.*

Por otro lado, las entidades públicas solo pueden hacer aquello que les es permitido por ley. Además de tratarse de la mayor manifestación del principio de legalidad, se trata de una disposición de carácter constitucional. Así lo establece el artículo 121 de la Constitución Política de Colombia, cuyo tenor literal consigna que *“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”*, disposición que concuerda con el artículo 6 de la misma carta, que determina que *“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

En ese sentido, la ley ha establecido con absoluta claridad que la ANI tendrá competencia y obligaciones funcionales **únicamente de cara a la infraestructura que le haya sido asignada por el Ministerio de Transporte o el Gobierno Nacional**, tal y como lo ha determinado la ley. El numeral 2º del artículo 4º del Decreto Ley 4165 de 2011 es claro al consignar que la ANI tiene que planear y elaborar las concesiones y asociaciones público-privadas únicamente respecto a *“infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional”*.

2. En el caso concreto, la parte demandante pretende que se declare responsable a la ANI por los daños ocasionados en un accidente de tránsito causado por la “falta de señalización” de una vía cerrada y que no estaba habilitada para transitar. No obstante, dentro de las funciones y objeto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI<sup>2</sup> **no se encuentra** de manera expresa e inequívoca la de **operación, mantenimiento y señalización de las vías**. La ANI se encarga de la administración de los contratos de concesión mediante los cuales el concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, siendo este último el ejecutor directo de tales proyectos, además quien los mantiene y rehabilita.

Si bien es cierto que el tramo donde ocurrió el accidente hace parte de los proyectos concesionados por esta entidad, conforme el contrato de concesión N°011 de 2015, suscrito entre la ANI y el concesionario sociedad Nuevo Cauca S.A.S., el llamado a responder es el ejecutor de la vía, vale decir, el concesionario, conforme las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.

Desde el punto de vista **formal**, es importante traer a colación lo indicado por el área técnica y el acervo probatorio, dado que, si bien es cierto la ANI suscribió contrato de concesión N°011 de 2015 con el concesionario Nuevo Cauca S.A.S., es este último al que le correspondía la función de administrar el corredor vial Cañasgordas-Dabeiba- El Tigre- Necoclí, teniendo entre otras obligaciones contractuales las siguientes:

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 2012, exp. 24677. M.P.: Enrique Gil Botero.

<sup>2</sup> Decreto 4165 de 2011



## **“APENDICE TÉCNICO 2-CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

- ✓ *Numeral 3.1.5 - Seguridad Vial del Apéndice Técnico No. 2: “(...) Se trata de la obligación que asume el Concesionario para realizar todas las acciones necesarias para reducir los índices de accidentalidad de la(s) vía(s), tanto en número como en gravedad. Esta obligación deberá cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Concesión a través de actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad de la(s) vía(s), para lo cual el Concesionario actuará sobre su estado de conservación, sobre su geometría y su señalización (Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3), así como en la promoción de actitudes de manejo preventivo y seguro, teniendo en cuenta la relación de la vía con las comunidades aledañas a los pasos urbanos y demás asentamientos poblacionales, de acuerdo con lo que se defina en el SGSV (Sistema de Gestión de Seguridad Vial) (...).”*

- ✓ *Numeral 3.1.6 Integridad del Corredor del Proyecto. El Concesionario deberá mantener la integridad de la(s) vía(s) como unidad ofreciendo un servicio integral en todos sus componentes. Los elementos que constituyen la(s) vía(s) son, entre otros, alineamiento horizontal, vertical, sección transversal (corona, carriles, bermas, cunetas, hombros de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronación y los descoles, las estructuras de ponederos y puentes con sus respectivas zonas de influencia, los botaderos de materiales de desechos, Corredor del Proyecto, la señalización, las Estaciones de Peaje, Pesaje y los servicios propios y de atención a los Usuarios (grúas, ambulancias, carros taller, centro de control operacional, áreas de servicio, etc). La de la(s) vía(s) incluye su vinculación consistente en la Ley Aplicable.*

(...)

- ✓ **3.2.1 Manual de Operación**

*El Concesionario deberá presentar a la Interventoría un Manual de Operación que describa el modelo de Operación del sistema vial y que contenga y especifique los protocolos e instrucciones de acción, tanto para las operaciones rutinarias (integración del sistema de coordinación operacional, comunicaciones, monitoreo, mediciones, pesajes, recaudación de peajes y asistencia a los Usuarios), como para aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia, accidente o situación extraordinaria.*

*El Manual de la Operación y Mantenimiento deberá considerar estrategias y acciones para cumplir los siguientes objetivos:*

(...)

- *Garantizar la seguridad vial durante las 24 horas del día y de los 365 días del año.*

### **3.3.3.1.6 Derrumbes**

*En caso de derrumbes, el Concesionario deberá remover el material producto de ellos, los obstáculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos en ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental o en los estudios ambientales.*

*El retiro de obstáculos, material de derrumbes, deslizamientos y escombros deberá iniciarse a partir del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el Concesionario deberá disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su pronta remoción. El Concesionario estará permanentemente disponible durante este periodo, informará al Interventor de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuará sin límite de cuantía en volumen del derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo*

*En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario deberá garantizar la transitabilidad en forma gradual, iniciando con el despeje para el paso de vehículos hasta finalizar con el despeje total de la vía, considerando en todo caso que no deberá autorizarse el tránsito de vehículos hasta tanto las condiciones de seguridad sean las adecuadas para ello. En todo caso la Interventoría deberá verificar la transitabilidad gradual teniendo en cuenta la integridad de los usuarios de la vía.*

*El Concesionario dispondrá de un plazo máximo para iniciar la remoción y de otro para liberar completamente la zona afectada de la vía (ambos especificados también por el Indicar O4), y entregará la(s) corona(s) al tránsito debidamente lavada(s) con agua a presión.*

*Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con sus obligaciones de resultado algunas de las tareas a ser desarrolladas por el Concesionario en el evento de ocurrencia de un derrumbe se encuentran en la siguiente tabla:*

Tabla 5-Actividades de Mantenimiento en Caso de Derrumbe-Documento INVIAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
625	Despeje de derrumbes	Despeje de derrumbes (incluye maquinaria y señalización temporal

*En todo momento, el Concesionario dispondrá de la totalidad de materiales, equipos de cargue, transportes y mano de obra necesarias para la ejecución adecuada del trabajo, así como para registrar las modificaciones y/o cambios en la infraestructura derivadas de la ejecución de estas actividades, y para ello podrá contratar personal y disponer del programa de Mantenimiento vial a cargo de microempresas o cooperativas.*

**PARTE GENERAL-CTO 011 DE 2015**

- ✓ *Literal (e) del numeral 5.2 – Contratistas: “(...) En todos los casos, el Concesionario seguirá siendo el responsable frente a la ANI por la ejecución de la totalidad de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas que ejecuten los Contratistas y sus respectivos subcontratistas, y deberá mantener indemne a la ANI por incumplimientos, y demandas de los Contratistas y subcontratistas. (...)”.*



- ✓ *Literal (a) del Numeral 14.3 – Indemnidad: “(...) El Concesionario se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Contratistas, subcontratistas o dependientes. (...)”*

Igualmente, en el concepto técnico elaborado de forma conjunta entre el área técnica y la interventoría se hace hincapié en el tema de la señalización de la vía, precisando que:

*“(...) la señalización vial horizontal y vertical a lo largo de todo el corredor del Proyecto fue objeto de observaciones por parte de la Interventoría en los frentes de obra activos, incluyendo el frente de obra del túnel falso del K0+800 de la UF2, tal y como se expone en el numeral 5 de esta comunicación<sup>3</sup>, en el cual se presenta la trazabilidad que existe respecto del presunto incumplimiento de la obligación contractual del Concesionario en la implementación del Plan de Manejo de Trafico – PMT / seguridad vial del proyecto en conexiones viales (Trazado existente, corredor vial culminados y frentes de obras activos). En el numeral 5 del presente comunicado también se exponen las actuaciones posteriores, por parte del Concesionario”*

#### **b. Inexistencia de la falla del servicio**

1. La falla del servicio es un título de imputación de la responsabilidad del Estado. Así lo ha explicado el Consejo de Estado:

*“En casos en que se debate la responsabilidad del Estado como consecuencia de un daño producido por el incumplimiento del deber legal de la Administración de mantener en óptimo estado de conservación, mantenimiento, señalización y seguridad las vías públicas, el título de imputación por excelencia es el de falla del servicio. En efecto, ésta surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación - conducta activa u omisiva- del contenido obligatorio, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico, por parte del juez, de las falencias en que incurrió la Administración y que implican un consecuente juicio de reproche; por su parte, la entidad pública demandada podrá excluir su responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligatorio que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada –positivos o negativos- o si demuestra que en la producción del daño medió una causa extraña como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero. Para que surja la responsabilidad de la Administración, se requiere, entonces, la concurrencia de dos factores: i) la comprobación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo del contenido obligatorio impuesto normativamente a la Administración, de un lado y ii) la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro”<sup>4</sup>.*

<sup>3</sup> Consorcio Interventor PEB-ET Comunicación PS-IAM2-DP-9448-22 del 25 de octubre de 2022

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 22 de octubre de 2015, expediente: 52001-23-31-000-2006-00838-01(39045).



De acuerdo con la jurisprudencia aplicable a este tipo de casos, se advierte que el daño reclamado a esta entidad pública se habría producido por un eventual mal funcionamiento de la administración. Por lo tanto, el título de imputación aplicable sería el de la falla del servicio, más exactamente la responsabilidad por falla **probada** del servicio en el mantenimiento de las vías públicas. De acuerdo con los presupuestos necesarios para que se configure la falla en el servicio, la prosperidad de las pretensiones de la parte interesada dependerá de que se pruebe el daño, la omisión que se le atribuye a la entidad demandada y la relación de causalidad entre dicha omisión y la producción del daño.

2. En el caso concreto, la parte demandante pretende el reconocimiento de unos perjuicios ocasionados por el accidente señalado anteriormente que, en su criterio, se debió a la falta de señalización que indicara la existencia de un túnel falso. No obstante, la demandante no probó la existencia de una acción y/u omisión que implique el incumplimiento de contenido obligacional alguno a cargo de la ANI. Por el contrario, las razones contractuales y las pruebas que se harán valer en el proceso demuestran que la ANI no se encuentra de manera expresa e inequívoca encargada de la **operación ni señalización de las vías**. Como ya se dijo anteriormente, la ANI se encarga de la administración de los contratos de concesión, mediante los cuales el concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, **siendo este último el ejecutor directo de tales proyectos**.

En este sentido, no existe prueba alguna que acredite los supuestos de hecho invocados con la solicitud de los que se pueda derivar responsabilidad de la ANI, por cuanto no existe prueba alguna que del comportamiento activo o pasivo de la ANI se hubieran causado los perjuicios alegados por los demandantes.

Por el contrario, se puede evidenciar que la parte llamada atender los requerimientos y acciones en la vía es el concesionario sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Lo anterior, en virtud de las obligaciones suscritas en el contrato N°011 de 2015. **Hechos N°18**

*Para efecto de exponer el estado de la señalización vertical en la época y localización del presunto accidente, nos permitimos informar que la señalización está conforme al inventario de los registros de la Interventoría tal como se detalla en el siguiente gráfico, donde la señalización próxima al sitio del evento mencionado PR04+0350 es:*





TABLA N° 1 SEÑALIZACIÓN PRÓXIMA AL SITIO DEL PRESUNTO SINIESTRO

ABSCISA	COSTADO (IZO O DER)	TIPO	ESTADO TABLERO			ESTADO PARAL			OBSERVACIÓN
			B	R	M	B	R	M	
PR4+041	I	SR-26	X			X			VELOCIDAD MAXIMA 50
PR4+050	D	SR-30(50)	X			X			T1 CHEVRON
PR4+056	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+056	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+080	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+080	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+101	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+101	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+127	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+127	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+154	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+154	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+176	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+176	I	SP-75	X			X			T1 CHEVRON
PR4+200	I	SP-75	X			X			T2 CHEVRON
PR4+200	I	SP-75	X			X			VELOCIDAD MAXIMA 50
PR4+216	I	SR-30(50)	X			X			CURVA PELIGROSA A LA IZQ
PR4+315	I	SP-01	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA IZQ
PR4+361	D	SP-03	X			X			ZONA ESCOLAR + HORARIO
PR4+450	D	SP-47A	X			X			VELOCIDAD MAXIMA 30
PR4+577	D	SR-30(30)	X			X			PROHIBIDO ADELANTAR
PR4+577	D	SR-26	X			X			ZONA ESCOLAR + FLECHA
PR4+647	D	SP-47B	X			X			ZONA ESCOLAR + FLECHA
PR4+650	I	SP-47B	X			X			DESCENSO PELIGROSO
PR4+714	I	SP-27	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA DER
PR4+731	D	SP-04	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA DER
PR4+770	I	SR-30(30)	X			X			VELOCIDAD MAXIMA 30
PR4+786	D	SP-46	X			X			PEATONES EN LA VIA
PR4+856	I	SP-47A	X			X			ZONA ESCOLAR + HORARIO
PR4+886	D	SP-03	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA IZQ
PR5+149	D	SP-04	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA DER
PR5+190	I	SP-04	X			X			CURVA PRONUNCIADA A LA DER



Figura No 1. Localización y disposición de las señales en proximidad al sitio del evento en el PR04+0350

Conforme a la Señalización horizontal en la época y localización del presunto evento en el PR04+0350, en los registros periódicos del estado de la Señalización Horizontal en el sitio se encontraba en buen estado, sector donde la demarcación horizontal hay y hubo doble línea amarilla, la cual advierte al conductor de la prohibición de adelantar en ambos sentidos de la carretera.





FIGURA 1. REGISTRO FOTOGRAFICO



**Hechos del N°19 al N°22**

Conforme a lo expresado por el Concesionario, no hay observación. Por lo anterior se espera que la información aportada sirva de utilidad para el GIT Defensa Judicial, en base a lo solicitado mediante Memorando radicado ANI N° 20227010121213”.

3. Por lo tanto, no existió falla del servicio por parte de la ANI, como quiera que la parte demandante no aportó pruebas que acreditaran la existencia de una acción y/u omisión por parte de la ANI que causaran la producción del daño y, por el contrario, se acreditó que dichas obligaciones están en cabeza del concesionario Nuevo Cauca S.A.S.

**c. Hecho de un tercero:**

1. Uno de los eximientes de responsabilidad del Estado es el hecho de un tercero. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado, que “la entidad pública demandada podrá excluir su responsabilidad [...] si demuestra que en la producción del daño medió una causa extraña como la fuerza mayor, el **hecho exclusivo y determinante de la víctima** o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero”<sup>5</sup>.

2. En el caso concreto, la causa eficiente de los daños que alegan los demandantes fue el incumplimiento del concesionario Nuevo Cauca S.A.S. con su obligación de señalización y seguridad vial del proyecto. Como ya se manifestó anteriormente, si bien es cierto que el tramo donde ocurrió el accidente hace parte de los proyectos concesionados por esta entidad, conforme el contrato de concesión N° 011 de 2015, suscrito entre la ANI y el concesionario Nuevo Cauca S.A.S., el llamado a responder es el ejecutor de la vía, vale decir, el concesionario, conforme las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.

3. Por lo tanto, el deber de responder recae única y exclusivamente en el concesionario Nuevo Cauca S.A.S., quien por su cuenta y riesgo adelanta la ejecución del proyecto e incumplió sus obligaciones contractuales.

**d. Inexistencia de solidaridad de la ANI frente a las conductas de los particulares:**

<sup>5</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 22 de octubre de 2015, expediente: 52001-23-31-000-2006-00838-01(39045).



1. La Ley 1437 de 2011, CPACA, en su artículo 140 que define el medio de control de reparación directa, presenta una regulación particular frente a la responsabilidad Estatal, cuando concurre un sujeto particular o privado. En efecto, en el inciso final de la normatividad invocada se indica expresamente lo siguiente:

*“En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.*

Conforme la normativa anterior, en los eventos en los que el daño es causado por un particular y concurre también una entidad estatal, es indispensable que el juez administrativo diferencie la proporción de condena, con base en la incidencia o causación del daño dependiendo de la actividad u omisión del particular –Concesión y de la administración, sin que pueda pensarse que el Estado deba asumir solidariamente la responsabilidad del particular.

2. En el caso concreto, la parte demandante pretende que se declare responsable a la ANI por los daños ocasionados en un accidente de tránsito causado aparentemente por el incumplimiento del concesionario Nuevo Cauca S.A.S con su obligación de señalización y seguridad vial del proyecto. Sin embargo, por cuenta de las relaciones sustanciales existentes en caso de demostrarse algún perjuicio sufrido por los demandantes el llamado a responder sería el concesionario Nuevo Cauca S.A.S. Lo anterior, como quiera que la ANI no está obligada a responder solidariamente por los daños que pudo haber causado el concesionario y los miembros de dicha sociedad.

3. Por lo tanto, la ANI no está obligada a responder solidariamente por los perjuicios que pudieron haber sido causados por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

Al respecto cabe resaltar que no es exigible actuación alguna a la ANI o a la Concesionaria en este caso, puesto que no tiene función constitucional, legal o contractual vinculada o relacionada con la vigilancia y/o control del cumplimiento o no de las normas de tránsito por parte de los conductores de los vehículos y demás usuarios que transitan por las vías concesionadas, como se puede leer de lo regulado en el Decreto 4165 de 2011 y del propio Contrato de Concesión.

Ahora, en el caso remoto de encontrar que existió alguna falla del servicio atribuible a la vía, se debe enfatizar en que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá permanecer indemne por estipulación contractual que suscribió el Concesionario y la actual jurisprudencia del Consejo de Estado.

En efecto, el Consejo de Estado<sup>6</sup> ha precisado que existe solidaridad entre la Administración y los particulares que ejecutan las obras públicas, por razón del fuero de atracción. También, que esa posición se basa en una interpretación del ordenamiento jurídico que garantiza la protección de los derechos de las víctimas, pues ha considerado: “(...) **que aun cuando el**

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 2 de agosto de 2018. Radicado No. 19001233100020050190901. Expediente No. 45801. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.



***particular deba concurrir al pago de la condena en forma total y, más aún, cuando solo lo hará en forma parcial, el Estado debe ser obligado en forma solidaria a la satisfacción de las condenas impuestas, con el fin de garantizar la solvencia del deudor y hacer efectivo el derecho a la reparación integral. Ello sin perjuicio de las acciones que tendrá para recobrar la parte que corresponda al particular.”*** (Se destaca).

Conforme lo anterior, se advierte que, si en el caso particular, se demuestra la solvencia de la Concesionaria, se deberá entender garantizada la protección de los derechos de la víctima, razón por la que el Estado deberá ser absuelto de toda pretensión condenatoria en solidaridad, aún con mayor exigencia si se observa que la solidaridad no es un componente de imputación al Estado o de la responsabilidad, según el mismo artículo 90 de la Constitución Política.

En el caso concreto, el desarrollo del Contrato de Concesión trae consigo la solvencia del particular, razón por la que ese riesgo, por la naturaleza del mismo, lo asume el Concesionario con la cláusula de indemnidad que se incluyó en el Contrato, situación que podrá evidenciar el Juzgado de lo consignada en el Contrato.

De no encontrar garantía de la solvencia del particular, se ruega al Despacho Judicial que siga la línea fijada por el Consejo de Estado en casos donde se reclaman perjuicios en desarrollo de Proyectos Viales Concesionados y se encuentra solidariamente responsable a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Contratista, pues esa Corporación ha resuelto condenar en solidaridad a la Entidad Pública, pero declara que la proporción en que es responsable el Contratista corresponde al 100%, como ocurrió en un caso reciente, donde falló así:

“(…)

*“Tercero. CONDENAR solidariamente a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (...) a indemnizar a los demandantes los daños sufridos (...).”*

***“Cuarto. Declarar que la proporción en que es responsable la unión temporal demandada corresponde al 100%. En tal virtud, la Agencia Nacional de Infraestructura, podrá repetir contra la unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y/o cualquiera de sus integrantes (...) por el 100% de aquello que pague con ocasión de la presente condena.”***  
(Negritas mías)

En ese orden, de encontrar el Juzgado que a la Agencia Nacional de Infraestructura le asiste responsabilidad solidaria en este caso, porque el proyecto vial lo ejecuta la Concesionaria, se pide que se declare que la proporción en que es responsable la referida Concesionaria corresponde al 100%, según el derrotero fijado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia que emitió el 2 de agosto de 2018, dentro del radicado N°19001233100020050190901 y expediente N°45801.

#### ***e. Pleito Pendiente Parcial***

En el presente caso se observa que en la Rama Judicial obran dos procesos por el mismo medio de control de Reparación Directa, basado en los **fundamentos fácticos**, con identidad de **partes (pasiva)** y **activa** (parcialmente) y con idénticas **pretensiones**. El primero que cursa en este Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Popayán, bajo el radicado N°19001333300120220019700, demandantes: ABNER CALIX CAMPO Y

OTROS y el segundo, en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Cauca - Popayán, bajo el radicado N°19001333300320230000300, cuyos demandantes son: CLARA LORENA CALIX CAMPOS Y OTROS.

**Fundamentos fácticos - idénticos:**

Los presuntos hechos dañinos básicamente se fundamentan el accidente de tránsito acaecido el día 26 de octubre de 2020 en el tramo vial correspondiente al Tramo 1 Popayán - Cali, sector comprendido entre los PR's 00+0000 y PR's 77+0000, Ruta 2504, incluyendo el intercambiador vial Sur de Santander de Quilichao, junto con sus vías conectantes y retornos que intercomunican la Ruta 2504 con el municipio de Santander de Quilichao, en los dos sentidos del tránsito vehicular, en el tramo 04 (Popayán- Santander de Quilichao) en la abscisa PR 04+350 metros, sector conocido como Vereda La Cabuyera, jurisdicción del municipio de Popayán - Cauca, sector a cargo de la CONCESIONARIA NUEVO CAUCA SAS.

Indican que como consecuencia de dicho accidente resultaron fallecida la señora MARÍA EUGENIA CAMPO IPIA y lesionada la señora CLARA LORENA CALIX CAMPO, quien se encontraba en estado de embarazo.

Concretamente narran que “...la señora CLARA LORENA CALIX CAMPO, que ella y su madre quedaron, entre el pavimento y el vehículo, aprisionadas, sin poder moverse, pedía auxilio, y la gente que empezó a llegar, intentaron sacarlas pero no pudieron, intentaron levantar el bus pero era muy pesado y no pudieron, luego llego un carro y con ayuda de un gato hidráulico, lograron levantar un poco el bus, sacaron con gran dificultad, a la señora MARIA EUGENIA CAMPO IPIA y posteriormente a CLARA LORENA CALIX CAMPO, que se encontraba en avanzado estado de gestación”.

Dejando claridad que el énfasis fáctico en la primera demanda fue el fallecimiento de la señora MARÍA EUGENIA CAMPO IPIA y en la segunda, las lesiones de la señora CLARA LORENA CALIX CAMPO.

**Parte pasiva - idénticas:**

En ambas demandas de manera idéntica señalan como presuntos responsables de los precitados hechos dañinos a:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, NUEVO CAUCA SAS y EMPRESA DE TRANSPORTE COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA – COOMOTORISTAS.

**Parte activa - parcial:**

En la demanda que cursa en el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Popayán, bajo el radicado N°19001333300120220019700, la parte demandante es:

1	ROSALVINA IPIA YULE	madre	C.C. No. 1.067.526.166
2	NOE CAMPO RAMOS	Padre	C.C. No. 4.786.604
3	JOSE JOAQUIN CALIX TAQUINAS	Esposo	C.C. No. 76.297.927



4	JOSE JOAQUIN CALIX CAMPO	Hijo	C.C. No. 1.067.529.997
5	YERSON FARID CALIX SALAZAR	NIETO	NIUP 1.067.535.172
6	ABNER CALIX CAMPO	Hijo	C.C. No.1.115.192.729
7	ABNER DAVID CALIX TENORIO	NIETO	NIUP 1.067.535.210
8	DEICY MILENA CALIX CAMPO	Hija	C.C. No.1.192.786.054
9	DEILYN JOHANA CONDA CALIX	NIETO	Menor de edad
10	LUZ ADRIANA CALIX CAMPO	Hija	C.C. No. 1.067.526.664
11	KATHERIN YULIANA MEDINA CALIX	NIETO	Menor de edad
12	JHON ALEX PAVI CALIX	NIETO	NIUP 1067535309
13	NATALIA MEDINA CALIX	NIETO	Menor de edad
14	LLINER MIGUEL MEDINA CALIX	NIETO	Menor de edad
15	MARCO FIDEL CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 76.298.628
16	CORNELIO CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 1.067.520.313
17	DIOCELINA CAMPO IPIA	Hermana	C.C. No. 25.732.321
18	RODRIGO CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 4.786.305
19	GUSTAVO CAMPO IPIA	hermano	
20	LEONEL CALIX CAMPO	HIJO	C.C. No. 1.067.526.955
21	CLARA LORENA CALIX CAMPO	HIJA	C.C. No. 1.192.786.045
22	YEIMI VANESA CONDA CALIX	NIETA	
23	MAILY LICED CALIX CAMPO	NIETA	NIUP No. 1.067.536.212
24	NATALIA CAMPO IPIA	HIJA	C.C. No.1.059.840.932
25	YESICA LLULIED CAMPO CAMPO	NIETA	NIUP No.1067.522.914
26	LEIDY ROCIO CAMPO CAMPO	NIETA	NIUP. No.1067.524.198
27	HEYLER JOHAN CALIX MUÑOZ	NIETO	TI. 1.061.142.413

En la demanda que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Cauca - Popayán, bajo el radicado N°19001333300320230000300, la parte demandante es:

1	CLARA LORENA CALIX CAMPO	Víctima Directa	C.C. No. 1.192.786.045
2	LUIS GIOVANNI CONDA PAVI	Compañero	C.C. 1.002.947.134
3	YEIMI VANESA CONDA CALIX	Hija menor	NUIP 1062.017.294
4	MAILY LICED CALIX CAMPO	Hija	NIUP No. 1.067.536.212
5	ROSALVINA IPIA YULE	Abuela materna	C.C. No. 1.067.526.166
6	NOE CAMPO RAMOS	Abuelo materno	C.C. No. 4.786.604
7	JOSE JOAQUIN CALIX TAQUINAS	Padre	C.C. No. 76.297.927
8	JOSE JOAQUIN CALIX CAMPO	Hermano	C.C. No. 1.067.529.997
9	YERSON FARID CALIX SALAZAR	Sobrino	NIUP 1.067.535.172
10	ABNER CALIX CAMPO	Hermano	C.C. No.1.115.192.729
11	ABNER DAVID CALIX TENORIO	Sobrino	NIUP 1.067.535.210
12	DEICY MILENA CALIX CAMPO	Hermana	C.C. No.1.192.786.054
13	DEILYN JOHANA CONDA CALIX	Sobrina	Menor de edad
14	LUZ ADRIANA CALIX CAMPO	Hermana	C.C. No. 1.067.526.664
15	KATHERIN YULIANA MEDINA CALIX	Sobrina	Menor de edad
16	JHON ALEX PAVI CALIX	Sobrino	NIUP 1067535309



17	NATALIA MEDINA CALIX	Sobrina	Menor de edad
18	LLINER MIGUEL MEDINA CALIX	Sobrino	Menor de edad
19	LEONEL CALIX CAMPO	Hermano	C.C. No. 1.067.526.955
20	HEYLER JOHAN CALIX MUÑOZ	Sobrino	Tl. 1.061.142.413

La diferencia se encuentra en que en la segunda demanda no se incluyeron a:

MARCO FIDEL CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 76.298.628
CORNELIO CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 1.067.520.313
DIOCELINA CAMPO IPIA	Hermana	C.C. No. 25.732.321
RODRIGO CAMPO IPIA	Hermano	C.C. No. 4.786.305
GUSTAVO CAMPO IPIA	hermano	
NATALIA CAMPO IPIA	HIJA	C.C. No.1.059.840.932
YESICA LLULIED CAMPO CAMPO	NIETA	NIUP No.1067.522.914
LEIDY ROCIO CAMPO CAMPO	NIETA	NIUP. No.1067.524.198

Y si al compañero permanente de la demandante Clara Lorena Calix Campo.

**Pretensiones idénticas:**

Con base en los hechos descritos solicitan en ambos procesos que se *“declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Nuevo Cauca SAS y La Empresa de Transporte Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS, y en consecuencia se condene al pago de perjuicios materiales e inmateriales, causados a los demandantes”*.

De acuerdo con lo manifestado y con fundamento en lo señalado en el numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 **se formula la excepción de "pleito pendiente" o "litispendencia"**.

La que al momento de fijar el litigio deberá resolver el Despacho, ya que como lo ha indicado la Jurisprudencia del Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-01290-01 Actor: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“(…)

*“...la jurisprudencia ha establecido otros requisitos para la configuración de la excepción previa de pleito pendiente, por ejemplo, en fallo de 31 de mayo de 2007, en el proceso radicado con el No. 2004-01224-01(AP) con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Sala entendió como pleito pendiente lo que se expone a continuación: “El objeto o finalidad de la excepción previa de pleito pendiente es evitar, no solo la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones y entre las mismas partes, sino la ocurrencia de juicios contradictorios frente a iguales aspiraciones. En consecuencia, los elementos concurrentes y simultáneos para su configuración y declaratoria son: -Que exista otro proceso en curso. –Que las pretensiones sean idénticas.*





*“Que las partes sean las mismas. –Que al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los mismos hechos. Y en la sentencia AP-2004-01092-01 del 21 de septiembre de 2006 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia de la Consejera Dra. Martha Sofía Sanz Tobón, Actor: Roberto Ramírez Rojas contra Alcaldía Local de Barrios Unidos, se precisa que los procesos deben tramitarse ante la rama judicial.*

*“La configuración de la excepción de pleito pendiente supone la presencia de los siguientes requisitos, en forma concurrente: i) Que se esté adelantando otro proceso judicial, ii) identidad en cuanto al petitum, iii) identidad de las partes y iv) identidad en la causa petendi. De lo anterior se concluye que la excepción propuesta no está llamada a prosperar, toda vez que no concurren los requisitos para la configuración del pleito pendiente. En efecto, el demandado fundamenta el mecanismo exceptivo en el hecho de que al momento de formularlo la Contraloría Distrital adelantaba un juicio fiscal, esto es, un procedimiento especial que en absoluto puede confundirse con el proceso judicial en ejercicio de la acción de repetición que ahora se decide y, por tanto, no puede configurarse ninguno de los restantes requisitos necesarios para la existencia de la excepción esgrimida.*

*“(…) al derecho que tienen las partes de solicitar la suspensión del pleito debido a la existencia de otro u otros que guardan íntima relación con el objeto de lo que se debate en el proceso que se pretende suspender, haciendo necesario esperar que los otros asuntos se decidan para evitar decisiones contradictorias, o la posibilidad de que las partes de común acuerdo le soliciten al juez la suspensión del proceso, el pleito pendiente hace alusión a una excepción previa reconocida expresamente por el legislador con la cual también se busca que no hayan decisiones contradictorias, pero en la cual solo basta que exista un proceso en curso con las mismas pretensiones, las mismas partes y los mismos hechos”.*

Así mismo, la mencionada Corporación en sentencia de veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 88001-23-33-000-2017-00038-01, Actor: MUNDO MARINO VELILLA VÉLEZ Y CÍA. S. EN C.S., sobre el particular ha considerado:

*“(…)*

*“se tiene que son los mismos a los comentados precedentemente para entender configurada una pretensión, es decir, se demanda la identidad de los sujetos activos y pasivos de la pretensión, así como de los hechos que sirven de soporte fáctico y la petición jurídica que se persigue con la demanda formulada, en dos o más procesos adelantados simultáneamente.*

*“Sobre esta excepción y su procedencia anota Devis Echandía “Así, pues, existirá litis pendencia cuando el objeto, la causa petendi y los sujetos de la pretensión o de una de las varias acumuladas sean unos mismos en ambas demandas, de modo que la sentencia que llegue a dictarse sobre la una, constituya cosa juzgada para la otra...”[3], mientras que López Blanco apunta que “si se pretende habilidosamente promover más de un juicio idéntico, se propondrá la excepción de pleito pendiente, con el objeto de que sólo se tramite un proceso y restar eficacia al proceso más recientemente iniciado.”.*



*“Atendiendo a tales razones es por ello que el procedimiento contencioso administrativo modelado en la Ley 1437 de 2011 reconoce el "pleito pendiente" o "litispendencia" en tanto excepción previa que puede ser formulada por la parte accionada dentro del término de traslado de la demanda a efectos de ser resuelta en el curso de la audiencia inicial, tal como lo estipula en artículo 180, numeral 6° de la Ley 1437 de 2011.”[5] (Subrayas de la Sala).*

*“(…) excepción previa en estudio tiene como objetivo garantizar el principio de seguridad jurídica bajo el entendido de procurar certeza en las decisiones judiciales que diriman las controversias que se suscitan en la comunidad y alcanzar su correspondiente eficacia, lo cual a su vez redundaría en el cumplimiento de los fines que orientan la actividad judicial de celeridad, eficiencia y economía procesal.*

***“Así pues, también se evita que de forma simultánea se tramiten dos o más procesos con idénticas pretensiones, causa petendi y partes, y se impide que se profieran decisiones eventualmente contradictorias.***

***“En este sentido, se han decantado algunos presupuestos para la configuración de esta excepción, a saber:***

***“a. Que exista otro proceso en curso: es necesario este supuesto para la configuración de la excepción de pleito pendiente porque en caso de que el otro no esté en curso sino terminado y se presentaran los demás supuestos, no se configuraría dicha excepción sino la de cosa juzgada.***

***“b. Que las pretensiones sean idénticas: las pretensiones de los dos procesos frente a los cuales se pretenda formular la excepción de pleito pendiente deben ser las mismas para que la decisión de una de las pretensiones produzca la cosa juzgada en el otro, porque en caso contrario, es decir en el evento en que las pretensiones no sean las mismas, los efectos de la decisión de uno de esos procesos serían diferentes pues no habría cosa juzgada y por lo tanto no habría lugar a detener el trámite de uno de los procesos.***

***“c. Que las partes sean las mismas: es evidente que para la prosperidad de la excepción de pleito pendiente debe existir identidad en las partes tanto en uno como en otro proceso, porque de lo contrario las partes entre sí no tendrían pendiente pleito y además tampoco se configuraría la cosa juzgada toda vez que la decisión en un proceso conformado por partes diferentes respecto de otro proceso, no incidiría frente a la del último.***

***“d. Que los procesos estén fundamentados en los mismos hechos: si este requisito se estructura en la identidad de causa petendi se refiere' de modo que ella 'no es lo que permite al juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse.” (Subrayas de la Sala)***

*“En desarrollo de lo dicho, es claro que existe un presupuesto cardinal para adelantar el estudio del caso en el marco de la excepción anotada, y es que exista un proceso en curso, entendiéndose como tal que no haya finalizado y que sobre el mismo no haya operado el fenómeno de cosa juzgada. Superado tal presupuesto, es procedente analizar los tres restantes, es decir, la identidad en el objeto, en la causa petendi y en los sujetos.”*

IV. PRUEBAS

Respetuosamente solicito se decreten, practiquen y las siguientes pruebas:

a. Documentales:

- 1. Respuesta N°20223060128313 de fecha 24/10/2022 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI.
- 2. Informe del Consorcio Interventor NUEVO CAUCA S.A.S. en el que suministra información mediante radicado NC-ANI-957 de 13 de octubre de 2022.

V. ANEXOS

Me permito anexar a esta contestación los siguientes documentos:

- 1. Poder y anexos.
- 2. Escrito de llamamiento en garantía a concesionario.

VI. NOTIFICACIONES

Agencia Nacional de Infraestructura	<a href="mailto:buzonjudicial@ani.gov.co">buzonjudicial@ani.gov.co</a>
María Victoria Uribe Dussán Apoderada	<a href="mailto:mvuribe@ani.gov.co">mvuribe@ani.gov.co</a>

Respetuosamente,



MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN  
C.C. N°52.047.190 de Bogotá  
TP N°86.544 Consejo Superior de la Judicatura.

Bogotá D.C.

Doctor:

**ERNESTO ANDRADE SOLARTE**

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

Correo: [j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**Ref.: Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA**  
**Radicado:** 19001-33-33-001-**2022-00197-00**  
**Demandantes:** Abner Calix Campo y otros  
**Demandados:** Agencia Nacional de Infraestructura ANI y otros.

**Asunto:** Llamamiento en garantía a NUEVO CAUCA S.A.S.

**MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN**, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, según poder que me fue conferido, respetuosamente comparezco ante su Despacho con el fin de formular **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** al concesionario **CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.**, para efectos de que se decida en el mismo proceso acerca de las relaciones que existan o puedan llegar a existir entre **LA AGENCIA** y **CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.** como resultado del proceso de la referencia, conforme a lo establecido por el artículo 64 y concordantes del Código General del Proceso y los hechos y fundamentos que se exponen a continuación:

---

## **I. PRECISIÓN PREVIA**

---

En lo tocante al llamamiento en garantía, el Código General del Proceso establece:

***“Artículo 64. Llamamiento en garantía.** Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

***Artículo 65. Requisitos del llamamiento.** La demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y demás normas aplicables.”*

El convocado podrá a su vez llamar en garantía.



**“Artículo 66. Trámite.** Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior.

*El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*

*En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.*

**Parágrafo.** No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes.”

(...)

**“Artículo 82. Requisitos de la demanda.** Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que éste los aporte.
7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley.

**Parágrafo primero.** Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.



**Parágrafo segundo.** *Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos.”*

Visto lo anterior, procedo a satisfacer los requisitos previstos en los artículos 64 y subsiguientes del citado Estatuto Procesal Civil, en la forma que pasa a verse:

### **PARTES EN LA RELACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:**

**Llamante en garantía- parte asegurada:** Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- antes Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, Agencia Nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, entidad demanda en el proceso de la referencia.

**Llamado en garantía:** CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S., sociedad por acciones simplificada representada legalmente por JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS, según RUES expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

---

## **II. HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

---

1. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, celebró con la sociedad Concesión Nuevo Cauca S.A.S. el contrato de concesión N°11 de 2015, que tiene por objeto *“EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO EL CONCESIONARIO, POR SU CUENTA Y RIESGO, LLEVE A CABO EL PROYECTO . EL ALCANCE FISICO DEL PROYECTO SE DESCRIBE EN LA PARTE ESPECIAL Y EN EL APENDICE TECNICO 1”*.
2. Por su parte, el mismo Contrato de Concesión 011 de 2015, en su cláusula 4.5 (folio 108 y siguientes) de la parte general se establecen las obligaciones del concesionario en la etapa de construcción, señalando entre otras las siguientes:

*(b) Adelantar las Intervenciones de conformidad con lo previsto en el Contrato y sus Apéndices para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, calidades de las obras, y en general todos los aspectos técnicos, por lo dispuesto en el Contrato y sus Anexos y Apéndices y en el Plan de Obras.*

*(c) Efectuar la Operación y Mantenimiento del Proyecto, incluida la de aquellas Unidades Funcionales respecto de las cuales se haya suscrito el Acta de Terminación de Unidad Funcional o el Acta de*





*Terminación Parcial de Unidad Funcional -según corresponda-, conforme a los requisitos previstos en el Apéndice Técnico 2.*

(...)

*(i) Evitar la imposición de multas a la ANI por incumplimiento imputable al Concesionario de las disposiciones ambientales y/o de gestión social y/o cualquier otra Ley Aplicable al Proyecto, y en caso de presentarse alguna sanción, multa o indemnización a cargo de la ANI como consecuencia del incumplimiento del Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por cualquiera de estos conceptos. (se subraya)*

3. Es así, como en virtud del referido contrato el Estado trasladó al Concesionario la totalidad de la responsabilidad de los daños que se causen a terceros por la ejecución del mismo y en caso de una eventual condena, esta deberá dirigirse en contra del titular de la obligación que, en el presente caso, como se evidencia, es directamente **CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.**

---

### III. ALCANCE Y EXTENSIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

---

En la eventualidad de que el Juzgado decidiera endilgar responsabilidad alguna a la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** en el reconocimiento y pago de los valores pretendidos por los demandantes, ello es, la prosperidad de las pretensiones relativas al pago total o parcial de los perjuicios reclamados por los demandantes, solicito se condene a **CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.** al reintegro de todo lo que la **AGENCIA** tuviera que pagar en virtud del “daño ocasionado”. Asimismo, sus correspondientes ajustes, costas y gastos del proceso.

En consecuencia, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda en relación con los hechos que dieron lugar al medio de control de la referencia, me permito solicitar al Señor Juez disponga la regulación de las prestaciones a cargo de la entidad llamada en garantía y a favor de **LA AGENCIA**.

---

### IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

---

Invoco como fundamentos jurídicos aplicables, la regulación frente al llamamiento en garantía artículos 225 y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, al igual que la Jurisprudencia del Consejo de Estado en el que de manera reiterativa se ha pronunciado sobre la figura.

Aquel artículo expresa:

**ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.** *Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del*



*perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

*El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*

*El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:*

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

Así mismo el Consejo de Estado en sentencia del 3 de marzo de 2010, MP.: Ruth Stella Correa Palacio, puntualizó:

*El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta **en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia.** Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante. El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento.” Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Sección, el llamamiento en garantía, se regula por el Código de Procedimiento Civil (artículo 57 del C.P.C.).(Se destaca en negrillas y subrayas).*

Sobre el valor de las copias simples, la Sala Plena de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado en su nutrida jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:



*“Sobre el tema, resulta de interés que, de conformidad con lo establecido en el art. 253 del C.P.C., modificado por el Decreto 2282 de 1989, “[l]os documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”. Ahora bien, no olvida la Sala que desde hace más de dos décadas se han mantenido en el art. 254 ib., las hipótesis en las cuales “[l]as copias tendrán el mismo valor probatorio del original”, empero, tampoco se puede pasar por alto que con la promulgación de la Constitución Política de 1991, “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.*

*“Ante el nuevo paradigma que imponía el texto constitucional, se precipitó la primera reforma procesal mediante el Decreto 2651 de 1991<sup>1</sup>, a cuyo tenor “[l]os documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros” (art. 25).*

*“Acorde con esta tendencia, el art. 11 de la Ley 446 de 1998 presume auténticos los documentos<sup>2</sup> privados, y para el efecto señala que los “documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos”<sup>3</sup>. La norma no encuentra necesaria la presentación personal ante ninguna autoridad<sup>4</sup> y tampoco requiere que se surta diligencia de autenticación<sup>5</sup>, pues la sola firma imprime al documento certeza<sup>6</sup> sobre su autoría.*

<sup>1</sup> La vigencia del referido decreto se prorrogó hasta el 10 de julio de 1998, pero la Ley 446 de ese mismo año (art. 162) no incluyó la citada norma como legislación permanente.

<sup>2</sup> “Documento es cualquier cosa que sirve por sí misma para ilustrar o comprobar por vía de representación, la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano. -Es toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento”. Parra Quijano Jairo, *Manual de Derecho Probatorio*, décima séptima edición, Librería ediciones del profesional LTDA, 2009, Pág.503-505.

<sup>3</sup> “(...) [L]as palabras “se reputarán auténticos” y viene la frase que significa ahorro de actividad: “sin necesidad de presentación personal ni autenticación”. Y este ahorro implica, que cuando suscribimos un documento lo podemos presentar personalmente o lo podemos autenticar. La norma no nos ahorra la firma sino la autenticación o la presentación personal (...)” –Parra Quijano obra citada página 516-.

<sup>4</sup> La presentación personal de un escrito, exigida por la ley, que surte ante cualquier despacho judicial, notario o autoridad administrativa autorizada- artículo 84 del C.P.C. modificado por el artículo 1, numeral 36 del Decreto 2282 de 1989 y por el artículo 41 de la Ley 1395 de 2010-. La nota de presentación personal tiene el valor de un testimonio autorizado, sobre que la firma corresponde a la previamente registrada o que la misma fue puesta en presencia de la autoridad, por su autor, previa identificación –artículo 73 Decreto 960 de 1970-

<sup>5</sup> Podrá autenticarse una copia mecánica o una literal de un documento, siempre que aquella corresponda exactamente al original que se tenga a la vista o que esta comprenda la integridad del documento exhibido y lo reproduzca con entera fidelidad// La autenticación se anota en todas las hojas de que conste el documento autenticado, con expresión de la correspondencia de la firma puesta allí con la registrada, o de su contenido con el del original; cuando este reposará en el archivo notarial, se indicará esta circunstancia, con cita del instrumento que lo contiene o al cual se halle anexo. El acto terminará con mención de su fecha y la firma del Notario// La autenticación sólo procede respecto de documentos que no emanen directamente obligaciones, no equivale al reconocimiento, tiene el valor de un testimonio fidedigno, y no confiere al documento mayor fuerza de la que por sí tenga – artículos 74,76 y 77, Decreto 960 de 1970-.

<sup>6</sup> Certeza: Conocimiento seguro y claro de algo. // Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de error. Diccionario de la Real Lengua Española, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe S.A., España, 2001.



*“Siguiendo este lineamiento, la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 252 del C.P.C., ratifica lo antes expuesto al señalar que “[e]l documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”, calidad que extiende al instrumento privado “[s]i habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente...”, mandato este aplicable, por lo demás, “también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella”.*

*“Al respecto, vale anotar que el art. 11 de la Ley 1395 de 2010, al modificar el art. 252 del C.P.C., resaltó que “En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.*

Seguidamente y sosteniendo la misma línea jurisprudencial<sup>7</sup>, el Máximo Órgano Judicial en materia Contenciosa Administrativa estableció lo siguiente:

*“Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 627 del C.G.P., son las siguientes:*

***“Artículo 243. Distintas clases de documentos.***

*“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.*

*“Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.*

<sup>7</sup> Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Dr. Enrique Gil Botero. Sentencia de 24 de abril de 2013. Expediente N° 07001-23-31-000-2000-00118-01



**“Artículo 244. Documento auténtico.**

*“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.*

**“Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.**

*“También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.*

*“Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.*

**“La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.** Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

***“Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.***

**“Artículo 245. Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia.**

***“Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.***

**“Artículo 246. Valor probatorio de las copias.**

***“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.***

***“Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.***





“(…)” (Negrillas y subrayado del original).

“Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el C.G.P., se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) **los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos**, ii) es posible que las partes los tachén de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) **los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia**, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar –si lo conoce– el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

“Por consiguiente, **el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos**, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales”. (Se destaca en negrillas y en subrayas).

Así las cosas, comoquiera que el Código General del Proceso ha entrado en vigencia y resulta aplicable dentro del proceso de la referencia, resulta lógico que sus disposiciones, en particular lo que refiere a la validez de las copias simples que se aportan al proceso judicial, sean tenidas en cuenta por su Señoría, comoquiera que el contrato de concesión que se aporta como prueba del vínculo entre el llamante y el llamado en garantía, obra en copia simple.

Sobre el llamamiento en garantía bajo los supuestos antes descritos, el Honorable Consejo de Estado en su reiterada Jurisprudencia<sup>8</sup> ha sostenido lo siguiente:

“(…)”

“4. En el asunto sub examine, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, solicitó llamar en garantía al Concesionario Vial de los Andes, en virtud del contrato No. 444 de 1994, que fue anexado a la solicitud en copia auténtica. El numeral cuarto de la cláusula vigésima segunda estipula lo siguiente (...)”

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. M.P. Dr Enrique Gil Botero. Sentencia de 2 de febrero de 2012. Expediente N° 25000-23-26-000-2010-00289-01





**“Así las cosas, es claro que *la fuente del llamamiento en garantía es el vínculo contractual entre el INCO, cesionario del anterior contrato, y el Concesionario Vial de los Andes*, por tal motivo, no le es aplicable la normativa de la ley 678 de 2001, toda vez que *no se trata de un llamamiento en garantía con fines de repetición, dado que no se le llama a responder como agente del Estado por su conducto dolosa o gravemente culposa, sino en virtud de la relación contractual que entre ellos existe.***

(...)

*El Despacho advierte que el argumento transcrito no es correcto en la medida que se trata de relaciones procesales diferentes y autónomas, porque la calidad de demandado obedece a la lógica de la relación principal del proceso, que se refiere a la discusión sobre la viabilidad de las pretensiones de la demanda, mientras que la existente entre llamado y llamante presupone la existencia de un vínculo obligacional previo, que lo obliga a responder en caso de un eventual fallo adverso al demandado llamante. En otras palabras, **el estatus de demandado del llamado en garantía no impide su vinculación, toda vez que desde la calidad de demandado controvertirá la existencia o no de responsabilidad y por tanto, la prosperidad de las pretensiones, mientras que por la vía del llamamiento se determinarán cuáles son las obligaciones que surgen, en virtud del contrato de concesión.***

La Jurisprudencia de la Sección Tercera ha avalado esta posibilidad, en los siguientes términos<sup>9</sup>:

*“Para despejar ese interrogante, la Sala<sup>10</sup> retoma los argumentos expuestos en un asunto similar al de la referencia, en el que señaló que ***sí es posible que en un mismo proceso una parte tenga en forma simultánea la condición de demandado y llamado en garantía.*** En efecto, en dicha providencia se indicó que, ***independiente de que una entidad ya tenga dentro del proceso la calidad de demandada, nada impide que en el mismo asuma también la condición de llamada en garantía,*** habida cuenta que las situaciones de demandado y llamado, por derivar de distintas fuentes, deben someterse también a diferentes enfoques de juzgamiento.*

*“Sobre este aspecto en particular la Sala<sup>11</sup> ya se había pronunciado en el sentido de que **si contra el demandado existe prueba –legal o contractual- que de lugar a vincularlo también como llamado en garantía, nada obstaría para que una y otras relaciones sustanciales: demandado y llamado en garantía, sean resueltas por el juez de conocimiento en una misma providencia.** En esa oportunidad precisó:*

<sup>9</sup> Expediente: 44001-23-31-000-2003-00136-01 (31015). C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 10 de febrero 2005, (23442).

<sup>11</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 17 de julio de 2003. C.P.: Alirio Eduardo Hernández Enríquez. (22786).



*‘La Sala estima que, aún siendo ambos demandados, si existiera prueba de un derecho -legal o contractual- del Banco de la República a exigirle al Popular el reembolso del monto al que resultare condenado, nada obstaría para que el primero llamara en garantía al segundo, con el fin de que el juez decidiera, en la misma sentencia, esa otra relación sustancial entre llamado y llamante, diferente e independiente de la que habría entre cada uno de ellos –en su calidad de demandados-*

*“En ese contexto, al ser procedente que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pueda ser llamado en garantía por PROMIGAS S.A., es del caso verificar si existe alguna relación de orden legal o contractual que haga viable la petición en ese sentido.”(Negrilla fuera de texto)*

*“En conclusión, como quiera que la solicitud formulada por la demandada, Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, no se refiere a un llamamiento con fines de repetición, y teniendo en cuenta que el medio probatorio aportado es idóneo y pertinente para acreditar el supuesto de que trata el inciso segundo del artículo 54 del C.P.C., en tanto ostenta la calidad de prueba sumaria del vínculo contractual existente entre las partes, se aceptará el llamamiento en garantía, de allí que, se confirmará el proveído de primera instancia”.*

Para tal efecto, en los estrictos términos que dispone la Ley y la Jurisprudencia me permito aportar copia del contrato de concesión N°11 de 2015 suscrito entre la ANI y Concesión Nuevo Cauca S.A.S., así como el certificado de existencia y representación de dicha sociedad, documentos útiles y pertinentes para que proceda el llamamiento en garantía solicitado.

---

## V. PRUEBAS

---

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 64 y concordantes del Código General del Proceso, me permito acompañar los siguientes documentos:

- Registro Único Empresarial y Social - RUES, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Copia del Contrato de Concesión N°011 de 2015.

---

## VI. ANEXOS

---

- Mensaje de datos contentivo del presente escrito y de sus anexos para efectos de la citación a CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.


VII. RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES

El llamado en garantía, **CONCESIÓN NUEVO CAUCA S.A.S.** recibirá las notificaciones judiciales de acuerdo con el precitado registro único empresarial, en la Avenida el El Dorado N°69 B - 45 Of. 606 de la ciudad de Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico que allí se señaló, está: [notificaciones@nuevocauca.com](mailto:notificaciones@nuevocauca.com)

Y para los efectos de ley, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, se le informa al Despacho las direcciones de correo electrónico para notificaciones:

Agencia Nacional de Infraestructura	<a href="mailto:buzonjudicial@ani.gov.co">buzonjudicial@ani.gov.co</a>
María Victoria Uribe Dussán Apoderada	<a href="mailto:mvuribe@ani.gov.co">mvuribe@ani.gov.co</a>

Cordialmente,



MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN  
C.C. N°52.047.190 de Bogotá  
TP N°86.544 Consejo Superior de la Judicatura.